

La trastienda de cómo el Gobierno dejó caer a la ministra Sandoval por la suspendida compra de la casa de Allende



■ La salida de la titular de Bienes Nacionales empezó a gestarse el viernes, cuando la histórica visita al Polo Sur de Boric se vio opacada por la atención mediática del caso.

POR RODOLFO CARRASCO

“Esto es algo que no debió haber sucedido”. Con estas palabras, la ministra del Interior, Carolina Tohá, resumió el sentir de gran parte del Gobierno, que a casi un año de terminar su mandato sufrió este lunes una nueva baja en el gabinete. Esta vez, debido a un error que debió detectarse a tiempo en el marco de la fallida compra de una casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo.

Cerca del mediodía de este lunes, la vocería en La Moneda a cargo de la ministra (s), Aisén Etcheverry, contemplada en principio para detallar los énfasis del Ejecutivo en la primera semana legislativa de 2025, daba un giro.

Se comunicaba, en paralelo, por parte de Presidencia en escuetas seis líneas que el mandatario había solicitado la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y agradecía su desempeño.

El conflicto generado por la vulneración a la Constitución, que implicaba adquirir la casa transgrediendo la prohibición de realizar contratos con el Estado que tienen los ministros y parlamentarios, teniendo a Maya Fernández, la titular de Defensa y nieta del exmandatario, como una de las propietarias del inmueble —al igual que la senadora e hija del expresidente, Isabel Allende (PS)— ya habían colmado la paciencia en La Moneda.

A pesar de que Sandoval llegó a explicar personalmente lo sucedido, no fueron atendidos sus argumentos y pocos minutos después de bajar desde el segundo piso del palacio de Gobierno, se daba a conocer el pedido de renuncia de la militante del Frente Amplio.

Pero la salida de la periodista y exdiputada se comenzó

a gestar el viernes, cuando la histórica visita al Polo Sur del Presidente Boric, junto a un equipo de ministros y científicos, se vio opacada por la atención mediática del caso y las críticas transversales a la hoy frustrada adquisición, que bordearía los \$ 1.000 millones.

Se trataba de la apertura de un nuevo flanco a La Moneda, a 13 meses de terminar el mandato, que vuelve a poner en tela de juicio los equipos a cargo de visar este tipo de decisiones y la experiencia para ejercer los cargos.

El Ejecutivo, en un intento de controlar los daños, centró la responsabilidad política en Sandoval, pues su repartición que estaba a cargo de gestionar la compra. Pero desde la oposición ya anticipan que exigirán que Fernández también asuma su responsabilidad política.

En un comunicado, la familia Allende se refirió al caso, señalando que “adherimos al proyecto del Gobierno” y que “nuestra única motivación ha sido que la casa se transforme en un museo” (...) y que

“para el cumplimiento de este propósito, durante todo este proceso nos hemos atendido a los trámites indicados. Tal como compartimos en su momento la iniciativa, compartimos ahora la decisión de desistirse de la adquisición de la residencia familiar”.

“Horror jurídico”

El analista político y profesor de la U. de Talca, Mauricio Morales, sostuvo que el Gobierno ha reconocido públicamente el error “achacando la responsabilidad política a la exministra de Bienes Nacionales”.

A su juicio, “el error fue demasiado grosero como para dejarlo pasar, toda vez que la propia Constitución prohíbe los contratos entre ministros o legisladores con el Estado”.

El experto sostuvo que nadie entiende cómo esto avanzó sin mayores trabas hasta casi convertirse en un acto formal e irreversible, lo que hubiese traído peores consecuencias, como una acusación constitucional contra la ministra Fernández y la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende.

“Acá, definitivamente, no hubo intento de aprovechamiento o engaño. Simplemente, el caso fue producto de la incompetencia de los encargados de revisar estos procedimientos”, agregó.

Ante lo sucedido, el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, “queda establecido que, junto a las responsabilidades penales y administrativas, las políticas son cada vez más necesarias para garantizar el control la rendición de cuentas”.

“El aprendizaje es que el Gobierno tiene que mejorar los mecanismos de control y asesoría tecno-política que evite estos errores auto infligidos”, dijo.

Pese a que Sandoval llegó a explicar en persona lo sucedido, no fueron atendidos sus argumentos y pocos minutos se daba a conocer el pedido de renuncia.